



Espacios Públicos

ISSN: 1665-8140

revista.espacios.publicos@gmail.com

Universidad Autónoma del Estado de México

México

Rodríguez Alcázar, Javier

La Europa de la crisis y el gasto militar: los casos de Grecia y España

Espacios Públicos, vol. 15, núm. 33, enero-abril, 2012, pp. 56-71

Universidad Autónoma del Estado de México

Toluca, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67622579004>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

La Europa de la crisis y el gasto militar: los casos de Grecia y España

Fecha de recepción: 24 de octubre de 2011

Fecha de aprobación: 31 de enero de 2012

*Javier Rodríguez Alcázar**

RESUMEN

La crisis económica que afecta a Europa se está combatiendo con drásticos recortes al gasto social. Sin embargo, el gasto militar no se está reduciendo en la misma proporción en todos los países europeos (incluso sigue aumentando fuera de Europa) y persisten algunos llamamientos a incrementarlo y a considerarlo uno de los motores para salir de la crisis. Esta paradójica situación se explica a partir de determinadas concepciones de la seguridad y de la economía de la industria militar. Tras analizar la situación actual en los casos de España y Grecia, y criticar esas concepciones, propongo una estrategia diferente respecto a las políticas de seguridad europeas.

PALABRAS CLAVE: gasto militar, seguridad humana, I+D militar, España, Grecia.

* Doctor en Filosofía. Profesor titular en el Departamento de Filosofía I. Miembro del Instituto de la Paz y los Conflictos, Universidad de Granada, España.

ABSTRACT

Europe is experiencing a global economic crisis, which is being fought with draconian cuts in social expenses. But, remarkably, military expense is not being reduced to the same extent in all European countries (it is even increasing in other countries), and there are some calls to increase it and take it as one of the spurs to overcome the crisis. This paradoxical situation is explained as a consequence of certain conceptions of security and army industry economy. After analyzing the present situation in the cases of Spain and Greece, and criticizing such conceptions, I defend a different strategy concerning European security policies.

KEY WORDS: military expenditure, human security, military R&D, Spain, Greece.

INTRODUCCIÓN

Europa está atravesando una de las peores crisis económicas de las últimas décadas, la cual está acompañada de importantes problemas en otras regiones del mundo. Países como Grecia, Irlanda, España o Italia tienen dificultades para financiar su gasto público y sus cuentas se sitúan a distancias desiguales, pero siempre inquietantes, de la bancarrota. Otros países europeos están respondiendo algo mejor ante la crisis, pero experimentan, de igual manera, bajas tasas de crecimiento y problemas en su sector financiero, y no parecen completamente

inmunes a un posible efecto dominó si las finanzas públicas de los países con mayores dificultades acaban sufriendo un colapso.

Frente a esta situación, los responsables de las finanzas europeas intentan responder con diversas estrategias, entre las que destaca la reducción generalizada del gasto público: se congelan salarios de funcionarios y pensionistas, se cierran empresas públicas o se adelgazan sus plantillas, se suprimen programas sociales, se recorta el gasto sanitario, se gasta menos en educación y en cultura.

Dada esta situación, y dado el continuo crecimiento del gasto militar mundial desde el 11 de septiembre de 2001, parecería que este capítulo debiera ser el primer candidato a sufrir un severo ajuste. Sin embargo, los acortamientos de los presupuestos militares de los países europeos están teniendo un alcance desigual y, en algunos casos, son poco decididas. Además, estas tímidas reducciones empiezan a verse acompañadas por voces externas e internas que exigen una mayor participación europea en los costes de mantenimiento de las capacidades militares de la Alianza Atlántica y en la financiación de sus operaciones, así como declaraciones de responsables políticos que defienden los efectos benéficos que el gasto militar puede tener sobre la recuperación económica.

En lo que sigue, tras proporcionar algunos ejemplos de tales voces y declaraciones, examino las concepciones de la seguridad y de la economía de la defensa que les

prestan plausibilidad. A continuación aporto algunos argumentos que permiten poner en cuestión dichas concepciones y, finalmente, defendiendo el hecho de que las autoridades europeas, lejos de atender esos llamamientos a incrementar el gasto, deberían radicalizar y acelerar las iniciadas reducciones en los presupuestos militares, si quieren contribuir responsablemente desde las políticas de defensa a la superación de la crisis actual.

EL GASTO MILITAR EN TIEMPOS DE CRISIS: EL CASO DE ESPAÑA

Hace unos meses la prensa española recogía la siguiente frase: “No deberíamos haber adquirido sistemas [de armas] que no vamos a utilizar, para escenarios de confrontación que no existen y, lo que es más grave, con un dinero que no teníamos entonces ni tenemos ahora” (González, 2011a). Esta enunciación no resultaría sorprendente si se lo hubiéramos oído a un líder pacifista, a un académico bien informado o a un portavoz de la oposición política de alguno de los numerosos países que gastan demasiado y con escaso criterio en armar sus ejércitos. Lo sorprendente es que fue pronunciada por ¡el secretario de Estado de Defensa! del Reino de España, Constantino Méndez, cuando compareció ante el Congreso de los Diputados en octubre de 2010 para presentar los presupuestos del año 2011.¹

Bien es verdad que, como suelen hacer rutinariamente los responsables políticos, también éste se apresuró a culpabilizar de los citados desmanes al gobierno anterior, es decir, al Partido Popular (PP). Y no le faltaba razón, pues los gobiernos del presidente Aznar embarcaron al país en diversos y costosos proyectos de adquisición de armas que seguimos y seguiremos pagando. Sin embargo, el recurso de los gobiernos en activo de acusar de todos los males al que les precedió resulta menos creíble cuanto más años llevan los últimos gobernantes en el poder y, en el momento en que esas afirmaciones se realizaron, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) llevaba ya casi siete años sosteniendo sus sucesivos gobiernos sobre mayorías parlamentarias relativamente holgadas.

En realidad, la política española exhibe, en lo tocante al gasto militar, una notable continuidad a lo largo de los años, con independencia del color político de los sucesivos gobiernos. Si nos atenemos a los datos del *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI), con cifras expresadas en dólares constantes de 2009, encontramos que entre 1988 y 1996 (gobiernos del PSOE) el gasto militar global en España se movió en la franja comprendida entre los 12 938 millones de dólares del año con menor gasto y los 15 560 del año con mayor dispendio. De 1997 a 2004 (gobiernos del PP) el gasto militar se situó entre 12 832 y 14 461 millones de dólares. Finalmente, de 2005 a

2010 (cuando España estuvo gobernada de nuevo por el PSOE), el gasto osciló entre 14 565 y 17 646 millones de dólares (SIPRI, s/fa).

Ilustraré esta continuidad en el gasto entre las sucesivas administraciones españolas con un último dato, relativo en este caso, no al gasto militar total, sino al gasto en uno de sus capítulos: la inversión en investigación con fines militares (en lo sucesivo, I+D militar). El dato es el siguiente: si a los gobiernos del PP cabe atribuirles el récord en cuanto al porcentaje destinado a I+D militar, sobre el total de fondos públicos para investigación en los presupuestos generales del Estado (54% en 1999), un gobierno del PSOE tiene el honor de ser el que más fondos destinara a I+D militar en la historia de España: 2, 363.67 millones de euros corrientes en 2008 (Ortega, 2009: 18).

El problema con el que se encuentran el actual y los sucesivos gobiernos españoles, y que motivó la indignación del señor secretario de Estado de Defensa, es que los gobiernos anteriores han diferido el pago de costosos sistemas de armas adquiridos durante los últimos años, y ahora se enfrentan a una deuda de unos 26 000 millones de euros a los que deben hacer frente a partir de 2012 en cantidades que irán aumentando año tras año. Con el agravante de que este espectacular incremento en las obligaciones de pago viene a coincidir con un retroceso de los ingresos de España, debido a una crisis que le afecta en mayor medida, si cabe, que a la mayoría de los países miembros de la Unión

Europea; y con el doble agravante de que la compra de buena parte de esos sofisticados equipos no se justifica, ni siquiera, desde la concepción de la seguridad nacional del actual Ministerio de Defensa, expresada por boca de su secretario de Estado. Aún menos, como señalaré más adelante, desde otras concepciones de la seguridad que al autor de este trabajo le parecen más acertadas.

EL GASTO MILITAR EN TIEMPOS DE CRISIS: GRECIA

España, con una cifra de desempleo registrado superior a lo largo de 2011 a 20% de su población activa, con un creciente déficit público y con problemas para conseguir financiación en los mercados internacionales de deuda, está introduciendo severos recortes en el gasto de sus diversas administraciones (estatal, autonómica, provincial y local), lo que afecta a servicios básicos como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Así, exigen importantes sacrificios a la población y hacen difícilmente justificables los cuantiosos dispendios que, como acabamos de señalar, el Estado español ha debido durante los últimos años, y deberá seguir afrontando, aún en mayor medida durante los años venideros.

Ahora bien, más llamativa que la situación española resulta, si cabe, la de Grecia. En el momento de escribir este artículo, la Unión Europea está debatiendo la posibilidad de

conceder nuevos préstamos al gobierno griego por importe de 8 000 millones de euros, que le permitan hacer frente a sus obligaciones de pago más inmediatas. Al mismo tiempo, empiece a darse ya por descontado que éste no podrá devolver todo lo que debe a sus acreedores y se especula sobre el porcentaje de la inevitable “quita”. En estas circunstancias, cabría esperar que el país hubiera emprendido en los últimos años un radical programa de reducción de su gasto militar. Sin embargo, su presupuesto militar para 2010 ha sido, según datos del SIPRI, el tercero más elevado de su historia: 9 369 millones de dólares constantes de 2009, un presupuesto superado solamente por los de 2008 y 2009.

El dato es aún más llamativo si lo expresamos en términos de porcentaje sobre el Producto Nacional Bruto (PNB), del cual, en 2009, Grecia gastó en su presupuesto militar de 3.2%. Éste resulta ser su porcentaje más elevado desde 2002 y casi el triple del porcentaje destinado por España al mismo capítulo el mismo año (1.1%) (SIPRI, s/fa). También resulta sorprendente, como ha señalado Bernardo de Miguel,² que Alemania, quien encabeza en la Unión Europea el coro de quienes exigen austeridad a los países en dificultades, sea al mismo tiempo uno de los principales vendedores de armas tanto a Grecia como a Turquía, su sempiterna enemiga (aunque igualmente miembro de la Organización del Tratado Atlántico Norte [OTAN] y candidata a la entrada en la Unión Europea).

EL GASTO MILITAR EN TIEMPOS DE

CRISIS: UN LLAMAMIENTO

A... ¡AUMENTARLO!

Dada la delicada situación de las finanzas europeas, uno esperaría que los responsables políticos, locales y foráneos, exhortaran a una reducción del gasto militar paralela a las reducciones que no se privan de recomendar a diestro y siniestro en otros terrenos. Sin embargo, lo que encontramos con mayor frecuencia son llamamientos casi desesperados para que Europa contribuya en mayor medida al gasto militar global. Así, el anterior secretario de Defensa de los EE.UU., Robert Gates, se despidió en junio de 2011 de los socios europeos de la Alianza Atlántica en los siguientes términos: “Se van a acabar la paciencia del Congreso y las ganas y de gastar cada vez más preciados fondos en nombre de unos países que parecen no querer dedicar los recursos necesarios a su propia defensa” (Martínez de Rituerto, 2011a). Más recientemente, su sucesor en el cargo, Leon Panetta, declaró: “Se equivocan quienes creen que el presupuesto de defensa de Estados Unidos es lo suficientemente grande como para absorber los choques y cubrir las lagunas de la Alianza” (Martínez de Rituerto, 2011b). Esto es: el presupuesto de defensa de los EE.UU. es muy grande (698, 281 millones de dólares en 2010) (SIPRI, s/fa), pero no es suficiente: sería necesario que los europeos se esforzaran en una medida semejante, y no lo están haciendo. Los

mismos gobiernos europeos que despiden funcionarios, congelan las pensiones de sus jubilados, cierran empresas públicas, adelgazan las plantillas de sus colegios y hospitales y se endeudan a tipos de interés creciente deberían hacer todavía un esfuerzo no sólo para mantener, sino incluso para incrementar su gasto militar. Tal es la petición del aliado norteamericano.

Ahora bien: ¿qué quiere decir que el presupuesto norteamericano de defensa es insuficiente? Los Estados Unidos de Norteamérica (recuérdese, aproximadamente 4.5% de la población mundial) consumieron en 2010, 43% del presupuesto militar global, casi seis veces más que China, el segundo país en gasto (SIPRI, s/fb). Por otra parte, si sumamos los presupuestos de defensa de los países de la OTAN (esto es, EE.UU. y sus aliados de ambos lados del Atlántico), sumaron más de un billón de dólares en 2010 (OTAN, 2011), casi dos tercios del presupuesto militar mundial.

Entonces, si de lo que se trata es de proteger la seguridad de los países mencionados, las cifras parecen excesivas y plantean interesantes preguntas como las siguientes: ¿cuánto más necesitarían gastar EE.UU. y sus aliados para sentirse seguros?; ¿qué incrementos deberían acometer el resto de los estados del mundo para garantizar la suya?; ¿deberían los países de la OTAN pedir al resto de los estados que gasten menos, de modo que el gasto de los primeros sea más productivo en términos de seguridad,

o deberían pedirles que gasten más, para contribuir a la rentabilidad de las industrias de defensa europea y norteamericana? Lo absurdo de la situación nos hace sospechar que lo que está en juego no es, en realidad, la seguridad sino la supremacía³ y, quizá, algo más: el negocio.

En lo que sigue voy a argumentar que las invitaciones a aumentar los presupuestos de defensa de los países europeos sólo encuentran apoyo, especialmente y dadas las actuales circunstancias, si se les permite descansar sobre dos coartadas espurias: una concepción muy cuestionable de la seguridad y la errónea convicción de que la industria de defensa es benéfica para el interés general de los ciudadanos de aquellos países que la favorecen.

**DESMONTANDO LA PRIMERA COARTADA:
¿NECESITAMOS GASTAR MÁS DINERO
EN LOS EJÉRCITOS PARA TENER
MÁS SEGURIDAD?**

El presupuesto de defensa del Estado de Israel ha oscilado, aproximadamente, durante los últimos 20 años, entre 6 y 15% de su PNB y el de Suecia, entre 1.2 y 2.6% (SIPRI, s/fa). Ciertamente, las circunstancias históricas y geoestratégicas de ambos estados son muy diferentes, pero baste este dato para ilustrar que no hay una correspondencia automática entre mayor gasto militar y mayor seguridad (tanto en lo tocante a riesgos objetivos

como a percepción de seguridad) de los ciudadanos de un país. Esto es así, incluso, si reducimos el concepto de seguridad a la defensa de la integridad de las fronteras del Estado y a la protección de sus habitantes frente a la amenaza de una agresión exterior. Pero, además, en los últimos años se ha cuestionado, con buenos argumentos, esa limitada concepción de la seguridad.

Los ciudadanos de cualquier país quisieran sentirse razonablemente *seguros* respecto a los diversos componentes que hacen valiosas sus vidas, y no sólo a uno de ellos en particular, pues no les basta con sentirse protegidos frente al ataque de un ejército exterior o frente a la amenaza de la delincuencia común, también lo desearían frente a la enfermedad, el hambre o la arbitrariedad de sus autoridades, dado que todos estos factores son fuentes de inseguridad. Los ciudadanos de los estados contemporáneos esperan que éstos les proporcionen un nivel razonable de protección en cada uno de esos terrenos, y han aprendido que perseguir una dimensión de la seguridad aisladamente puede acarrearles inseguridad en otras.

Así, un Estado que pretenda preservar a toda costa la seguridad nacional y dedique, con ese fin, una cantidad desmesurada a la compra de armamento puede provocar un aumento en la inseguridad económica o sanitaria de su población. En una situación como esa, los ciudadanos de ese país podrían sentirse muy inseguros y no encontrar consuelo en el hecho de contar con el

ejército más poderoso de la región. De forma semejante, fuerzas armadas poco cuidadosas en el manejo de las tecnologías de defensa podrían causar daños ambientales graves, hasta el punto de poner en peligro la salud de la población, incluida la de los propios militares. También en este caso tiene sentido afirmar que la atención unilateral a una dimensión de la seguridad está poniendo en peligro la seguridad de los ciudadanos en sentido amplio.

Por estas razones, y algunas más, han aparecido en los últimos años varios conceptos que quieren reivindicar, con distintos matices, esa necesidad de sentirnos seguros simultáneamente frente a diversas amenazas (esa necesidad a la que, por cierto, respondía ya, de forma más o menos imprecisa, el concepto cotidiano de “seguridad”). Así, en el ámbito académico de las Relaciones Internacionales, autores como Buzan (1991) han visto insuficiente atenerse exclusivamente a los aspectos político-militares de la seguridad y han propugnado que se amplíe la agenda para incluir, entre otras, cuestiones económicas y ambientales.⁴

En el ámbito no ya puramente académico de la política internacional, seguramente el hito más importante a este respecto lo constituyó la adopción del concepto de seguridad humana por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su *Informe sobre Desarrollo Humano* de 1994, titulado justamente *Nuevas dimensiones de la seguridad humana* (PNUD, 1994).

En el mencionado informe se considera demasiado estrecho el concepto de seguridad prevalente hasta entonces, el cual lo entendía como seguridad del territorio frente a la agresión exterior, como protección de los intereses nacionales o, en el mejor de los casos, como seguridad global ante la amenaza de un holocausto nuclear. Además, esas concepciones tradicionales se centraban excesivamente en la seguridad de los estados, olvidando que la prioridad debe ser la seguridad de las personas y que la búsqueda de la primera sólo puede justificarse como un medio para la segunda. Adicionalmente, el PNUD propone que el instrumento fundamental para la seguridad humana no pueden ser las armas y los ejércitos, sino el desarrollo humano sostenible.

Otra característica de la seguridad humana es que busca más la prevención de los riesgos que la actuación *a posteriori* y considera que las distintas fuentes de nuestra inseguridad están a menudo relacionadas entre sí. Tales fuentes de inseguridad son, por otra parte, muy diversas, lo que obliga a considerar a la seguridad humana como un concepto multidimensional con numerosos componentes. Así, el PNUD (1994) cita los siguientes: seguridad económica, alimentaria, sanitaria, ambiental, personal, comunitaria y política.

El concepto de seguridad humana no está exento de críticas y ha sido objeto de un extenso debate durante los últimos años. Ahora bien, hay argumentos para defender (Rodríguez Alcázar, 2004: 2011) que, usado

con las debidas cautelas, constituyen un considerable avance respecto a acercamientos más unidimensionales de la seguridad. En cualquier caso, parece claro que necesitamos avanzar hacia un concepto plausible de seguridad, que incorpore cierta complejidad y multidimensionalidad, que responda a los retos del mundo globalizado contemporáneo y a la interrelación entre las múltiples fuentes de riesgo presentes en él.

Ahora bien, cualquier concepto de este tipo, sea el de seguridad humana u otro semejante, nos proporciona un buen punto de partida para rechazar el llamamiento a incrementar el gasto militar en la Unión Europea. Los ciudadanos de Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia y del resto de los países de la Unión se enfrentan en estos momentos, en mayor o menor grado, a una posibilidad muy tangible de que aumenten sus niveles de inseguridad, y esa amenaza no proviene, principalmente, de la remota probabilidad de un ataque exterior frente al cual, por lo demás, sus fuerzas armadas y las de países aliados están más que razonablemente preparadas.

La inseguridad que afrontan muchos ciudadanos europeos tiene más que ver con el peligro de perder sus empleos, sus ahorros o sus viviendas, de recibir una asistencia sanitaria de peor calidad, de ver insuficientemente atendidos los servicios sociales y las escuelas públicas. Los ciudadanos europeos esperan que sus gobiernos hagan lo posible por librarlos de esas amenazas,

siendo necesarios grandes alardes de retórica y de cinismo para intentar convencerles de que la mejora de su seguridad humana pasa por un incremento del gasto militar, de que este capítulo debe ser la única excepción a la larga lista de recortes sociales que día tras día van desgranando los gobiernos del viejo continente. A menos que la industria militar, precisamente, resulte ser la panacea para la deseada recuperación económica. Como vamos a comprobar enseguida, no faltan valedores para tal idea.

DESMONTANDO LA SEGUNDA COARTADA: EL GASTO MILITAR NO ES LA MEJOR INVERSIÓN

Cuando escribo este artículo, España se acerca a una inminente campaña electoral que desembocará en las elecciones generales del 20 de noviembre. Ésta no ha comenzado oficialmente, pero los políticos de los diversos partidos que competirán lanzan ya sus *slogans* y sus mensajes. En el contexto de esta pre-campaña, el vicesecretario general de comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, ha afirmado que todas las políticas de su partido, una vez que consigan el poder, estarán orientadas a la creación de empleo, y citaba entre esas políticas la política de defensa (Rosa, 2011).

¿En qué puede concretarse la orientación de las políticas de defensa hacia la creación de empleo? El señor González Pons no lo

especifica, ni tampoco lo hace, por ahora, el partido en el que milita, pero podemos hacernos una idea si echamos un vistazo a la práctica política del gobierno socialista. Pues en esto también es de reseñar la notable continuidad entre los dos principales partidos de la política española.

El pasado 5 de octubre de 2011, el (entonces) presidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció por sorpresa, sólo mes y medio antes de las elecciones generales, la participación del país en el escudo anti-misiles de la OTAN. En concreto, Zapatero anunció que la base militar norteamericana de Rota, situada en territorio español, sería la sede del componente naval del mencionado escudo. El anuncio fue controvertido por varias razones: por la falta de información y debate previos, por haber sido tomada en la recta final del mandato presidencial, por su calado (pues no está claro que la decisión tenga acomodo en el convenio con EE.UU., vigente desde 1988, sin introducir cambios en éste) y por sus consecuencias: para empezar, el anuncio motivó una airada protesta de la diplomacia rusa.

Sin embargo, no entraré ahora a discutir estas cuestiones, sino que me fijaré en un aspecto que me parece tan importante como ellas: el hecho de que el presidente se apresurara a justificar la implicación de la base de Rota por el “impacto económico muy positivo” de la decisión sobre la región, que Zapatero ilustró con el millar de puestos

de trabajo directos e indirectos que, según él, se espera crear en la zona (González, 2011b). Ahora bien, ¿con qué dinero se crearán esos puestos de trabajo? Es de suponer que con dinero público, aportado por los contribuyentes de los países de la OTAN, pero esto parece olvidarse. Contratar maestros también crea puestos de trabajo, pero éste resulta no ser el momento adecuado para hacerlo, sino más bien el de despedirlos para adelgazar el déficit público. En cambio, parece que los empleos relacionados con la Defensa “se crean” sin que nadie los pague.

Así pues, se nos quiere transmitir la impresión de que habría, después de todo, buenas razones para no someter los presupuestos europeos de defensa al mismo régimen de adelgazamiento que los gobiernos de la UE están aplicando al gasto social. La principal justificación no sería ahora la seguridad, sino la economía, aunque, bien mirado, ¿por qué habría de renunciar la retórica oficial a ninguna de las dos? ¿Podemos crear riqueza mientras cuidamos la seguridad! Algo que, ciertamente, no se consigue pagando los sueldos de los maestros o aumentando las pensiones de los jubilados. Quizá, finalmente, tengan razón los secretarios de Defensa de los EE.UU., el actual y el anterior, y también los gobernantes españoles que, década tras década, con independencia de su color político, han mantenido el gasto en I+D militar en unos niveles llamativamente altos en relación con el monto total de la investigación científico-

tecnológica española (Ortega, 2009). Pero ¿es una buena estrategia combatir la crisis y el desempleo con el gasto militar y, en particular, mediante la investigación con fines militares?

Si lo que preguntamos es si el gasto militar crea empleo, la respuesta es, inequívocamente, afirmativa. Esto es evidente: hay en el mundo millones de individuos empleados por los ejércitos y las fábricas de armamento, y bastantes miles de investigadores trabajando en el desarrollo de nuevos sistemas de defensa. Ahora bien, este argumento no es, por sí mismo, concluyente. En efecto, eso mismo (que crean puestos de trabajo) se puede decir de otras muchas actividades cuyo patronazgo no nos parece adecuado solicitar a los gobiernos. Entre ellas, el tráfico de drogas y de esclavos, la piratería, la prostitución y la explotación infantil. Parece obvio que los estados no deberían favorecer cualquier actividad que cree puestos de trabajo. En algunos casos (v. gr., el comercio de esclavos) sostenemos que el Estado debería prohibir la actividad en cuestión, por mucho empleo que genere. En otros (v. gr., la pornografía o los juegos de azar), muchos defendemos que el Estado hace bien en tolerar y regular la actividad, aunque no debería promoverla.

En el caso del gasto militar, un defensor del concepto de seguridad en términos de seguridad humana podría admitir que, dadas las condiciones del mundo que habitamos, puede ser justificable un gasto militar moderado, esto es, uno que aporte

a los ciudadanos del país más seguridad que la que resta al detraer del presupuesto para educación o sanidad. Pero de lo que estamos hablando en la actual coyuntura es de aumentar el presupuesto de defensa cuando la seguridad humana de los ciudadanos de algunos países de la Unión Europea está comprometida, precisamente, porque se está recortando drásticamente el gasto en educación, en sanidad y en otros capítulos vitales. Por no hablar de la inseguridad que el propio gasto militar produce habitualmente en casa ajena y de otros efectos colaterales bien conocidos de estos generosos gastos de los estados, como el fortalecimiento de redes de comercio de armas que acaban alimentando a traficantes, terroristas, delincuentes y señores de la guerra.

Hay, pues, buenas razones morales por las que los estados, lejos de aumentar su gasto militar, deberían procurar reducirlo. Se me responderá, sin embargo, que en tiempos de crisis las consideraciones morales deben subordinarse a las puramente económicas, como bien ilustran las declaraciones anteriormente recogidas de los señores González Pons y Rodríguez Zapatero.

A esta última afirmación cabe responder de dos formas: bien negándose a aceptar la subordinación de la ética a la economía o bien cuestionando que, en realidad, la economía recomiende invertir en I+D militar. Completar la primera respuesta tomaría algún tiempo si se quisiera argumentar exhaustivamente, pero puede

justificarse esquemáticamente diciendo que corresponde a la ética discutir el peso que las consideraciones económicas deben jugar en la vida de los individuos y las sociedades, y no al revés.

La segunda respuesta requiere más elaboración. No en vano hay una extensa literatura dedicada a discutir, a lo largo de varias décadas, cuestiones como la medida en la cual la investigación militar produce un efecto de *spin off* sobre la tecnología en general (esto es, tiene aplicaciones inesperadas en otros ámbitos que dinamizan el desarrollo de diversas tecnologías civiles, a pesar de que la finalidad originaria fuera militar), o la viabilidad y rentabilidad de las llamadas *tecnologías de doble uso* (civil y militar).

Diversos economistas han advertido contra el peligro de exagerar el alcance de los *spillovers* desde la I+D militar hacia la civil. Por ejemplo, Kenneth Arrow, tras reconocer la importancia de ciertas investigaciones militares para el desarrollo de campos como la electrónica, señala que con el tiempo las prestaciones demandadas a las tecnologías militares están tan alejadas de las precisadas por los consumidores civiles que las transferencias de tecnología de un ámbito a otro son cada vez menores y resulta, por tanto, cada vez más ilusorio esperar mejorar en la productividad de la industria civil como consecuencia de inversiones en investigación militar (2000:20-21) Tarrés apunta otras razones para cuestionar la bondad de las inversiones en I+D militar desde el punto

de vista del estímulo de la economía civil, como el hecho de que los clientes de la industria militar suelen valorar en mayor medida las prestaciones de sus productos que el precio, lo que convierte a los diseños militares en demasiado caros, habitualmente, como para que pueda ser fácil su utilización rentable para otros usos (2000: 78-79). El mismo autor hace eco de estudios que indican que es más eficiente, desde el punto de vista de la creación de empleo, devolver a los contribuyentes el dinero dedicado al presupuesto militar.

Son numerosas las investigaciones que en los últimos años ponen de manifiesto la ineficiencia económica del gasto militar y la conveniencia de reducir los presupuestos militares a favor de otros conceptos presupuestarios de los estados. Así, varios estudios empíricos, como el de Bischack (1999) para el caso de EE.UU., muestran las consecuencias positivas de reinvertir el “dividendo de la paz” (esto es, el ahorro que se produce en situaciones de reducción estable del gasto militar) o cuestionan la existencia de una relación causal entre gastos de defensa y el crecimiento económico estadounidense (Smith y Tuttle, 2008).

Por su parte, Paloyo, Vance y Vorell (2010) muestran que el impacto negativo del cierre o reducción de tamaño de bases militares en Alemania a partir de 2003 fue insignificante. Otros estudios, como el de Pieroni y d’Agostino (2008) documentan que el gasto militar favorece el crecimiento

de la corrupción y frena el crecimiento económico, mientras que Keller, Poutvaarab y Wagener (2009) demuestran el impacto negativo que tiene el servicio militar sobre el crecimiento económico de aquellos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que mantienen la conscripción obligatoria.

Como es sabido, resulta casi imposible encontrar algún objeto de análisis que produzca unanimidad de diagnóstico entre los economistas, y éste del gasto militar no iba a ser la excepción. Así que es posible citar trabajos como el de Hartley (2010), que defienden la rentabilidad, desde el punto de vista de la seguridad y economía, de la inversión en defensa. Queda lejos de las posibilidades de este estudio entrar en un examen detallado de los argumentos desplegados por estos defensores del gasto militar. Para responderles de forma expeditiva, sin embargo, baste mencionar, con Arrow, que el mayor argumento económico a favor de los recortes en el gasto de defensa es la reducción de la probabilidad y el coste de la guerra, cuyas consecuencias económicas son demasiado bien conocidas (2000:23). De hecho, el empleo de nuevos métodos econométricos está conduciendo a la conclusión de que tales efectos son mucho más graves de lo que la mayoría de los economistas han sido capaces de estimar en el pasado, según señalan Brauer y Dunne (2010), así como Bozzoli, Brück y Sottas (2010).

CONCLUSIÓN: DESOIGAMOS A LOS SECRETARIOS DE DEFENSA

En un momento en que la economía europea experimenta grandes dificultades, *no* sería una buena idea incrementar el gasto de defensa, y menos aún hacerlo con la justificación, precisamente, de contribuir con ello a la recuperación económica del continente. A los estudios citados en el apartado anterior, que muestran abrumadoramente que el incremento del gasto militar tiene consecuencias generalmente negativas sobre el crecimiento y otras variables de la economía, podemos añadir los de Mylonidis (2008), que se centran específicamente en la Unión Europea y que llegan a la misma conclusión en el caso de ésta.

En general, pues, no es una buena opción para Europa, desde la perspectiva económica, incrementar su gasto militar, y es aún peor hacerlo en una época de crisis como ésta, cuando faltan recursos vitales para atender las necesidades básicas de los ciudadanos y para animar la actividad económica. Tampoco lo es desde el punto de vista de la seguridad, especialmente si, como he defendido más arriba, adoptamos una concepción multidimensional de la seguridad como la de seguridad humana.

En vista de las difíciles condiciones que enfrenta la economía europea y, aún con mayor gravedad, las regiones más pobres del mundo, el desvío de recursos públicos y privados hacia el gasto militar constituiría un claro ejemplo de lo que Galtung (1969)

llamó *violencia estructural*; y justificar, alentar o disimular ese desvío, representa lo que el mismo autor (1990) denominó *violencia cultural*. Por cierto, un tipo de violencia de esta última que han venido cometiendo los sucesivos gobiernos españoles durante décadas, es intentar escamotear a la opinión pública la verdadera magnitud del gasto en I+D militar. Esta maniobra, que ya fue condenada por la Revista *Nature* (12/10/2000), consiste en reconocer como inversión en investigación con fines militares únicamente la incluida en los presupuestos del Ministerio de Defensa, pero no las partidas, disimuladas, entre otras muchas, con finalidades diversas, financiadas con créditos sin interés por los ministerios de Industria y de Ciencia y Tecnología. Pues bien, a pesar de la denuncia de *Nature* y de la protesta de algunos movimientos sociales y grupos de científicos, la práctica en cuestión se mantiene hasta nuestros días (Ortega, 2009).

Los responsables de la Unión Europea (pero ¿hay alguien al volante?) deberían desoír las invitaciones de los sucesivos secretarios de Defensa de los Estados Unidos a aumentar la factura militar. En cambio, si Europa encontrara algún día una voz unida y creíble, ésta tendría que reclamar de EE.UU., justamente, que la acompañe, por el bien de su economía y de la seguridad global, en el camino de descenso del gasto que, obligada por la crisis, Europa ha emprendido últimamente. En efecto, Europa es la única gran región del mundo que ha reducido su presupuesto de defensa en 2010, rompiendo

con la tendencia alcista de la última década (SIPRI, s/fb) y sería deseable que este descenso no fuera un episodio puntual, sino el inicio de una prolongada tendencia.

Ahora bien, ¿tiene Europa alguna posibilidad no de cambiar la política de defensa de los EE.UU., sino tan siquiera de ejercer la suya propia sin imposiciones? Será complicado modificar las políticas de su socio norteamericano si pretende construir su influencia sobre el poder militar. Pues difícilmente podrá competir en poderío militar con ese socio, pudiéndose hundir en el intento. Pero aquellos países que consigan mejorar su eficiencia económica a través de medidas como el ahorro en el gasto de defensa y la inversión en sectores más productivos quizá puedan acabar forzando a EE.UU. a seguir el mismo camino, este escenario sería, finalmente, mejor para este país y mejor para todos. Si Europa consiguiera liderar tal cambio, la crisis que todos sufrimos habría merecido, después de todo, la pena.

NOTAS

¹ En la misma línea, en el documento del Ministerio de Defensa español titulado *Informe de análisis de la situación financiero-presupuestaria*, fechado en septiembre de 2011, se afirma: “la carga de pagos comprometida es de tal envergadura que colapsa cualquier proyección presupuestaria sensata a medio y largo plazo [...]; será prácticamente imposible afrontar nuevas adquisiciones en los próximos

20 años [...]; no será posible tampoco sufragar el coste de mantenimiento de los sistemas adquiridos en unos niveles operativos adecuados” (González, 2011c).

² Entrevista en *El País*, 06/10/2011, <http://www.elpais.com/edigitales/entrevista.html?encuentro=8439>.

³ Cfr. el estudio de Neuman (2010) sobre la importancia que la industria de defensa tiene a la hora de explicar la influencia política y el poder de los EE.UU. en el mundo unipolar contemporáneo.

⁴ Cfr., asimismo, Buzan, Weaver y De Wilde (1997).

BIBLIOHEMEROGRAFÍA

Arrow, Kenneth J. (2000), “The Basic Economics of Arms Reduction,” en *Peace Economics, Peace Science and Public Policy*, vol. 6, núm. 3, Berlín, pp. 11-26.

Bischack, Greg (1999), “Demobilization from the Cold War 1990-1998: Lessons of U.S. Conversion Policy”, en *Peace Economics, Peace Science and Public Policy*, vol. 5, núm. 2, Berlín, pp. 1-39.

Bozzoli, C., T. Brück y S. Sottas (2010), “A Survey of the Global Economic Costs of Conflict”, en *Defence and Peace Economics*, vol. 21, núm. 2, Londres, pp. 165-176.

- Brauer, Jurgen, y John P. Dunne (2010), "On the Cost of Violence and the Benefit of Peace", en *Peace Economics, Peace Science and Public Policy*, vol. 16, núm. 2, Berlín, pp. 1-12.
- Buzan, Barry (1991), *Peoples, States and Fear. An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*, Boulder (Colorado), Lynne Rienner.
- Buzan, Barry, Ole Weaver y Jaap De Wilde (1997), *Security: A New Framework for Analysis*, Boulder (Colorado), Lynne Rienner.
- Galtung, Johan (1969), "Violence, Peace and Peace Research", en *Journal of Peace Research*, vol. 6, núm. 3, Londres, pp. 167-191.
- (1990), "Cultural Violence", en *Journal of Peace Research*, vol. 27, núm. 3, Londres, 291- 305.
- González, Miguel (2011a), "Defensa renegocia una deuda de 26.000 millones en armamento", en *El País*, 12 de agosto, Madrid, España.
- (2011b), "Rota, el escudo del sur", en *El País*, 9 de octubre, Madrid, España.
- (2011c), "Defensa revisa los programas de armas para ahorrar 5.200 millones", en *El País*, 11 de octubre, Madrid, España.
- Hartley, Keith (2010), "The Case for Defence", en *Defence and Peace Economics*, vol. 21, núm. 5-6, Londres, pp. 409-426.
- Keller, Katarina, Panu Poutvaara y Andreas Wagener (2009), "Military Draft and Economic Growth in OECD Countries", en *Defence and Peace Economics*, vol. 20, núm. 5, Londres, pp. 373-393.
- Martínez de Rituerto, Ricardo (2011a), "Gates vaticina a la OTAN un futuro 'oscuro, si no negro'", en *El País*, 11 de junio, Madrid, España.
- (2011b), "Panetta reclama a los europeos coordinación en el esfuerzo financiero en Defensa para 'evitar sorpresas'", en *El País*, 5 de octubre, Madrid, España.
- Mylonidis, Nikolaos (2008), "Revisiting the Nexus Between Military Spending and Growth in the European Union", en *Defence and Peace Economics*, vol. 19, núm. 4, Londres, pp. 265-272.
- OTAN/NATO (Organización del Tratado del Atlántico Norte/North Atlantic Treaty Organization) (2011) "Financial and Economic Data Relating to NATO Defense. Defense expenditures of NATO countries (1990-2010)", en *Press Release*, 027, 10 de marzo, en http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_71296.htm?mode=pressrelease, consultado el 12 de abril de 2012.
- Nature* (2000), "Blurred budget is bad news", 407, 659, 12 de octubre, en <http://www.nature.com/nature/journal/v407/n6805/full/407659b0.html>, consultado el 12 de abril de 2012.

- Neuman, Stephanie G. (2010), "Power, Influence, and Hierarchy: Defense Industries in a Unipolar World", en *Defence and Peace Economics*, vol. 21, núm. 1, Londres, pp. 105-134.
- Ortega, Pere (2009), *Gasto e I+D militar en los presupuestos generales del Estado Español, año 2010*, Barcelona, Centre d'Estudis per a la Pau J.M. Delàs.
- Paloyo Alfredo, Colin Vance y Matthias Vorell (2010), "The regional economic effects of military base realignments and closures in Germany", en *Defence and Peace Economics*, vol. 21 (5-6), Londres, pp. 567-579.
- Pieroni, Luca, y Giorgio d'Agostino (2008), "Military Spending, Corruption and Economic Growth", en *Peace Economics, Peace Science and Public Policy*, vol. 14, núm. 2, Berlín, pp. 1-12.
- PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) (1994), *Informe sobre desarrollo humano 1994, Nuevas dimensiones de la seguridad humana*, Nueva York, Human Development Report Office, en <http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh1994/>, consultado el 11 de abril de 2012.
- Rodríguez Alcázar, Javier (2004), "La noción de seguridad humana: sus virtudes y sus peligros" en Revista *Polis*, núm. 11, en <http://www.revistapolis.cl/11/rodr.htm>, consultado el 12 de abril de 2012.
- (2011), *Ética, tecnología y seguridad*, Bogotá, Uniminuto.
- Rosa, Isaac (2011), "Un escudo, mil empleos", en *Público*, 8 de octubre, Madrid, España.
- SIPRI (s/fa), *The SIPRI Military Expenditure Database*, en <http://milexdata.sipri.org/>, consultado el 12 de abril de 2012.
- (s/fb), *Military Expenditure. The purpose of this project is to monitor, describe and analyse trends and developments in military expenditure worldwide*, en <http://www.sipri.org/research/armaments/milex>, consultado el 12 de abril de 2012.
- Smith, Jeffrey S. y M. H. Tuttle (2008), "Does Defense Spending Really Promote Aggregate Output in the United States?," en *Defence and Peace Economics*, vol. 19, núm. 6, Londres, pp. 435-447.
- Tarrés, Xavier (2000), "El presupuesto de defensa", en A. Oliveres y P. Ortega (eds.), *El ciclo armamentista español: una panorámica crítica (1989-1999)*, Barcelona, Icaria, pp. 63-88.